



**Rama Judicial**  
**Tribunal Administrativo del Valle del Cauca**  
**República de Colombia**

Santiago de Cali, once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2.021)

ACCIÓN:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2019-00900-00
DEMANDANTE:	MEDICINA DIAGNOSTICA S.A. <a href="mailto:info@medicinadiagnostica.co">info@medicinadiagnostica.co</a> <a href="mailto:direccion@slcabogados.com.co">direccion@slcabogados.com.co</a>
DEMANDADO:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE DE TULÚA E.S.E. <a href="mailto:gerencia@hospitaltomasuribe.gov.co">gerencia@hospitaltomasuribe.gov.co</a>
ASUNTO	LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO

Auto Interlocutorio nro. 166

**MAGISTRADO PONETE: VICTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ**

**I. ASUNTO**

La sociedad Medicina Diagnostica S.A. presentó demanda ejecutiva en contra del HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E. a fin de obtener el pago de la suma de dinero derivada del acta de liquidación del contrato de prestación de servicios nro. 1200-06-10-054-14 del 09 de noviembre de 2018, por la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$3.856.5780.484.00), más los intereses moratorios y las costas procesales.

Procede el Despacho a verificar si en el *sub examine* se cumplen los requisitos para librar mandamiento.

**II. ANTECEDENTES**

La obligación que se pretende recaudar se sustenta en la ejecución de una obligación dineraria a cargo del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe E.S.E., derivada del contrato de prestación de servicios nro. 1200-06-10-054-14, y contenida en el acta de liquidación bilateral del 09 de noviembre de 2018, en la cual se consignó:

- “1. El Consejo de Estado (sentencia del 29 de febrero de 2012, expediente 16.371) ha sostenido que la liquidación del contrato es una actuación administrativa posterior a su terminación normal, con el objeto de definir si existen prestaciones, obligaciones, derechos a cargo de las partes, hacer un balance de las cuentas para determinar quién le debe a quién a quién y cuánto y proceder a las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar, y así dar finiquito y paz y salvo a la relación negocial.  
(...)
3. Que a la terminación del contrato queda un valor pendiente por pagar de \$3.856.570.484, aclarando que el valor ya tiene las deducciones, retención en

la fuente y retención de IC el cual está soportado por los certificados emitidos por el área de contabilidad.

4. Que mediante la presente acta de liquidación, se cierra definitivamente el contrato estatal, cerrando la posibilidad de intentar una acción judicial en contra de la entidad contratante, por inconformidades o reclamaciones que no hayan sido resueltas de común acuerdo por las partes.
5. Que el contratista cumplió con el objeto contractual y se recibió a satisfacción. La presente liquidación se efectúa de mutuo acuerdo entre las partes y en los términos anteriores, se da por terminado y liquidado el contrato.”

La parte demandante solicita se libre mandamiento de pago por la suma señalada en el acta de liquidación bilateral del contrato de prestación de servicios nro. 1200-06-10-054-14<sup>1</sup>, más los intereses moratorios y las costas procesales.

### III. CONSIDERACIONES

#### DEL PROCESO EJECUTIVO Y EL TÍTULO EJECUTIVO EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL:

La Ley 1437 de 2011 no regula de manera integral el trámite del proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, es necesario remitirse al Código General del Proceso y aplicar de manera armónica ambos estatutos procesales, tal y como se explica a continuación.

El artículo 297 CPACA<sup>2</sup> establece que son títulos ejecutivos: **(i)** las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que condenen a una entidad pública al pago de sumas de dinero; **(ii)** las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que una entidad pública quede obligada al pago de sumas de dinero; **(iii) el contrato estatal, el acta de liquidación**, los documentos en que consten las garantías del contrato —que deberán estar acompañados del acto administrativo que declare el incumplimiento contractual— o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, y **(iv)** las copias auténticas de los actos administrativos que reconozcan un derecho o admitan la existencia de una obligación.

A su vez, el artículo 422 del CGP<sup>3</sup> establece que son títulos ejecutivos las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en: **(i)** un documento que provenga del deudor o de su causante; **(ii)** una sentencia condenatoria o cualquier otra providencia judicial; **(iii)** las providencias que en los procesos policivos aprueben la liquidación de costas o señalen

<sup>1</sup> Folio 84

<sup>2</sup> Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

<sup>3</sup> Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

honorarios de auxiliares de justicia, y (iv) los demás documentos que expresamente disponga la ley.

Respecto al mandamiento ejecutivo, el artículo 430 del CGP establece que: *“presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal”*.

El presupuesto para el ejercicio de la acción ejecutiva **es la existencia formal y material de un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo**, de los cuales surja la certeza legal y judicial del derecho del acreedor y la obligación correlativa del deudor.

**El título ejecutivo contiene tanto elementos sustanciales como formales.** En cuanto a los **primeros**, se debe verificar si aquél contiene una obligación clara, expresa y exigible al momento de incoarse la demanda. En tal sentido, el Consejo de Estado ha dicho:<sup>4</sup>

1. La obligación es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa.
2. La obligación es clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación.
3. La obligación es exigible cuando únicamente es ejecutable cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido.

A su turno, la doctrina se ha pronunciado sobre la necesidad de que el título objeto de ejecución sea claro y expreso, en los siguientes términos<sup>5</sup>:

*“ El ser expresa la obligación, implica un requisito que se puede entender mejor si analizamos etimológicamente el concepto. El vocablo expresar, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa “manifestar con palabras lo que uno quiere dar a entender” y expreso lo que es “claro, patente, especificado”,<sup>6</sup> conceptos que aplicados al del título ejecutivo implican que se manifieste con palabras, quedando constancia, usualmente documental escrita y en forma inequívoca de una obligación; de ahí que las obligaciones implícitas y las presuntas, salvo que la ley disponga lo contrario, no son demandables por vía ejecutiva.”<sup>7</sup>*

*Como complemento se exige, con redundancia, pues se acaba de ver que ser expreso conlleva la claridad, que la obligación sea clara, es decir que sus elementos constitutivos, sus alcances, emerjan con nítida perfección de la lectura misma del título ejecutivo, en fin, que no se necesiten esfuerzos de interpretación para establecer cuál es la conducta que puede exigirse al deudor”*.

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sección Cuarta, consejera ponente: Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. *Los procesos ejecutivos*. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.

<sup>5</sup> Código General del Proceso, Parte Especial, Hernán Fabio López Blanco, páginas 507 y 508, DUPRÉ Editores, Bogotá D.C., 2017.

<sup>6</sup> Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, 21ª ed. Madrid, 1992, págs. 661.

<sup>7</sup> Cfr. Hernando MORALES MOLINA, Curso de derecho procesal civil, Parte especial 6ª ed., Bogotá, Edit. ABC, 1973, pág. 75, quien afirma con acierto que no valen, pues, las expresiones meramente indicativas o representativas de la existencia de la obligación, ni tampoco las expresiones presuntas, salvo el caso de la confesión ficta y en éste, únicamente respecto de las preguntas asertóricas formuladas al interrogado que no compareció. Es decir, que las llamadas obligaciones implícitas, esto es, las que están incluidas en el documento (tanto en el escrito como en el documento que contiene la declaración verbal), pero sin que estén expresamente declaradas, no pueden exigirse ejecutivamente.



Respecto a los elementos formales del título ejecutivo, es de precisar que estos son los que se refieren a los documentos que contiene el respectivo título ejecutivo y a la forma en la que deben aportarse. Al respecto el Honorable Consejo de Estado<sup>8</sup> en relación al título ejecutivo, tratándose de obligaciones derivadas del contrato estatal, ha manifestado lo siguiente:

*“Es de anotar que cuando la obligación que se cobra deviene de un contrato estatal, por regla general, el título ejecutivo es complejo en la medida en que está conformado **no solo por el contrato**, en el cual consta el compromiso de pago, sino por otros documentos, normalmente actas y facturas elaboradas por Administración y contratista, en las cuales conste el cumplimiento de la obligación a cargo de éste último, y de las que se pueda deducir de manera clara y expresa el contenido de la obligación y la exigibilidad de la misma a favor de una parte y en contra de la otra. **Igualmente puede ser simple cuando la obligación que se cobra consta en un solo documento, que por sí solo da cuenta de ser clara, expresa y exigible, como sucede por regla general, con las obligaciones que constan en el acta de liquidación final del contrato.**”*

*Sólo cuando los documentos allegados como recaudo ejecutivo no dejan duda en el juez de la ejecución sobre la existencia de la obligación dada su claridad y su condición de expresa, además de su exigibilidad por ser una obligación pura y simple o porque siendo modal ya se cumplió el plazo o la condición, será procedente librar el mandamiento de pago.*

*Y tales condiciones no solo se predicen de los títulos valores, sino que pueden predicarse de otros documentos como sucede con el contrato que como fuente de obligaciones bien puede llegar a constituir título ejecutivo, generalmente de la naturaleza de los complejos por cuanto la estructuración del título requiere además del contrato en el que se sustenta la obligación, la demostración del cumplimiento de la condición de la cual depende el pago.”*  
(Negritas fuera de texto)

### 3.2. CASO CONCRETO:

Como se puede colegir del anterior acápite, para librar mandamiento de pago se debe verificar:

1. La demanda fue interpuesta en la jurisdicción y ante el juez competente;
2. El término para la presentación de la demanda no ha vencido;
3. La demanda formulada por el ejecutante cumple con los requisitos mínimos señalados en la ley;
4. Que el título judicial sea claro, expreso y exigible, esto es, i) que haya una obligación determinada o determinable; ii) la ejecutante acredite que la obligación está a su favor; iii) se tiene certeza de quién es el deudor; iv) transcurrió el término legal o se cumplió la condición sin que el deudor cumpliera con la obligación que tenía a su cargo.
5. si hay lugar al reconocimiento de intereses o no.

#### • DE LA JURISDICCIÓN Y DEL JUEZ COMPETENTE:

En el presente asunto, El artículo 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en relación con la ejecución de condenas impuestas a

<sup>8</sup> Consejo de Estado – Sección Tercera, auto del 16 de septiembre de 2004, radicado al número 26.726. Consejera ponente María Elena Giraldo Gómez.

entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero, consagra lo siguiente:

**“ARTÍCULO 299.** Salvo lo establecido en este Código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, en la ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, se observarán las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil para el proceso ejecutivo de mayor cuantía.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según las reglas de competencia contenidas en este Código, si dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento”.

Según la regla de competencia por razón del territorio consagrada en el numeral 4° del artículo 156 del C.P.A.C.A., *“En los contractuales y en los ejecutivos originados en contratos estatales se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato. Si este comprendiere varios departamentos será el tribunal competente a prevención el que elija el demandante”*.

Por lo anterior, este Despacho es competente para conocer de la demanda ejecutiva, atendiendo a que el lugar donde se ejecutó el contrato fue el Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E. de la ciudad de Tuluá – Valle, que corresponde a este circuito judicial.

- **CADUCIDAD:**

La Ley 1437 de 2011, que regula lo referente a los requisitos de la demanda, establece dentro de su artículo 164 el plazo para la presentación oportuna del libelo introductorio de cada medio de control. Para la caducidad de las demandas incoadas en ejercicio del proceso ejecutivo de títulos derivados del contrato, de decisiones proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales del estado de conformidad con el literal (k) de la referida disposición, se estableció un término de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida.

En el presente asunto, la **acción ejecutiva se encuentra vigente** al momento de la presentación de la demanda, pues se interpuso dentro del término señalado en el artículo 164, literal K)., toda vez que el cumplimiento de la obligación inició desde el 10 de noviembre de 2018, día siguiente a la firma de la liquidación bilateral del contrato y la demanda ejecutiva se presentó el 09 de octubre de 2019, es decir, dentro de los cinco (5) años de que trata la norma en cita.

- **LA DEMANDA FORMULADA POR EL EJECUTANTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS SEÑALADOS EN LA LEY:**

Revisada la demanda, se tiene que MEDICINA DIAGNOSTICA S.A., **se encuentra legitimado en la causa por activa**, por ser la sociedad contratista que ejecuto el contrato nro. 1200-06-10-054-14 y quien suscribió el acta de liquidación del contrato de prestación de servicios.

Por su parte, el HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE E.S.E se encuentra **legitimado en la causa por pasiva**, por ser la entidad a quien se le prestó los servicios dentro del contrato objeto de liquidación bilateral.

También, la demanda cumple con los requisitos establecidos en los artículos 82 y ss del CGP (designación del juez, nombre y domicilio de las partes, nombre del apoderado, las pretensiones, los hechos fundamento de las pretensiones el poder, título de ejecución, el CD y la dirección electrónica del apoderado de la parte ejecutante).

- **QUE EL TÍTULO JUDICIAL SEA CLARO, EXPRESO Y EXIGIBLE, ESTO ES, I) QUE HAYA UNA OBLIGACIÓN DETERMINADA O DETERMINABLE; II) LA PARTE EJECUTANTE ACREDITE QUE LA OBLIGACIÓN ESTÁ A SU FAVOR; III) SE TIENE CERTEZA DE QUIÉN ES EL DEUDOR; IV) TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO LEGAL O SE CUMPLIÓ LA CONDICIÓN SIN QUE EL DEUDOR CUMPLIERA CON LA OBLIGACIÓN QUE TENÍA A SU CARGO.**

En el caso concreto, debe mencionar el Despacho que la obligación es **EXPRESA**, pues se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa. Es decir, en el acta de liquidación del contrato de prestación de servicios nro. 1200-06-10-054-14 el HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE aceptó que a su terminación quedó un valor pendiente por pagar de \$3.856.570.484 a favor de la sociedad demandante y es **EXIGIBLE** pues no depende del cumplimiento de un plazo o condición, toda vez que está inició la fecha siguiente a la firma del acta de liquidación del contrato, sin que se haya realizado el pago.

Es **CLARA**, pues sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación, pues la efectividad de la obligación debe surtirla el HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE E.S.E. a favor de la sociedad demandante por la suma y equivalencia determinadas, con sus correspondientes intereses moratorios.

- **HAY LUGAR AL RECONOCIMIENTO DE INTERESES O NO:**

En cuanto a los intereses solicitados en la demanda, existiendo norma expresa que regula los mismos en materia de contratación estatal, se dará aplicación a lo establecido en el numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993, los cuales se liquidarán desde el día en que debió cumplirse la obligación, esto es, desde el 10 de noviembre de 2018, fecha siguiente al día de la liquidación del contrato, hasta el momento en que se realice el pago de la obligación, sobre el valor del capital objeto de liquidación en su tenor literal señala:

“... Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado.”

Por lo anterior y una vez estudiada la presente demanda ejecutiva por el despacho, se evidencia que esta reúne los requisitos de los artículos 82, 83 y siguientes, del C.G.P. y contiene título con los requisitos legales conforme al artículo 422 Ibídem, el despacho dando cumplimiento al Art. 430 del C.G.P. por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

## **R E S U E L V E**

**PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO** a favor de la sociedad **MEDICINA DIAGNOSTICA S.A.** y contra el **HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE E.S.E.**, por la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$3.856.570.484) más los intereses de mora, conforme a las razones expuesta en la parte motiva de esta providencia.



**SEGUNDO:** Se **ADVIERTE** que la suma ordenada en el numeral anterior será nuevamente objeto de revisión dentro de la oportunidad procesal pertinente.

**TERCERO: ORDENAR** a la parte ejecutada, que de conformidad con el artículo 431 del Código General del Proceso, **deberá cancelar las anteriores sumas a la parte demandante dentro de los cinco (5) días siguientes al presente proveído, o en su defecto, proponer excepciones en el término de diez (10) días siguientes a la presente decisión.**

**CUARTO: NOTIFICAR** personalmente la presente providencia a la parte demandada **HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE E.S.E.**, al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO** y a la **AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO** a los buzones de correos electrónicos creados por dichas entidades para efecto de recibir notificaciones judiciales de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 198 y 199 del CPACA. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020. La notificación se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje.

La parte demandante deberá remitir al correo electrónico [rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co), dentro de los CINCO (05) DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación por estado de la presente providencia, la constancia de remisión efectiva de la copia de la demanda, sus anexos y del auto admisorio.

Hasta tanto no se alleguen las constancias anteriormente referidas, no se procederá por la Secretaría de esta Corporación a realizar la notificación personal a los demandados. El incumplimiento de esta carga procesal dará lugar a la aplicación del artículo 178 del CPACA.

**QUINTO: RECONOCER** personería al abogado Carlos Armando Sussman Peña, identificado con la cédula de ciudadanía No. 32.229.002 y portador de la Tarjeta Profesional No. 89.069 del C.S.J, para actuar dentro de la acción ejecutiva en nombre y representación de la parte demandante, en el término del poder<sup>9</sup> a él conferido.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**VICTOR ADOLFO HERNANDEZ DIAZ**  
Magistrado

<sup>9</sup> Folios 82-83  
VoBoSecretario  
Ngg